



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESOLUCIÓN

Exp.: 040/2024

Archivo de actuaciones

Fecha entrada: 28/05/2024

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 28 de mayo de 2024 tiene entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial una reclamación de AAA, en referencia a una posible vulneración de la normativa de protección de datos personales por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de YYY, siendo su transcripción literal la siguiente:

«Soy letrado en ejercicio e interpuesto un acto de conciliación previo a interponer querella por un presunto delito de injurias y/o calumnias cometido (presuntamente) por la Magistrada Doña BBB Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de YYY.

Pese a no ser admitido a trámite el acto de conciliación la magistrada Doña BBB tuvo conocimiento de la misma e incluso aportó copia al CGPJ

Puesta queja contra el letrado de la administración de Justicia por entender que presuntamente él habría filtrado la información a la Magistrada Doña BBB porque conocía del acto de conciliación sin estar admitido a trámite se me contesta desde la SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL (Doña CCC) literalmente dice:

- Que el letrado de la administración de justicia reclamado notificó a la magistrada que habían ...

Se debe investigar quien ha accedido a los datos de este letrado, quien ha tecleado mis datos en el sistema para ver cuantos procedimientos tengo, se debe investigar cuantos funcionarios (ya sean magistrados, letrados de la administración o cualquier otro) ha tenido acceso a mis datos personales y a los procedimientos instados, cuantos han impreso algún tipo de dato, cuanto tiempo han estado viendo mis expedientes o cualquier otro dato mio.

Se debe investigar y sancionar a quien haya accedido a los datos y además de ello se debe poner algún tipo de filtro o mecanismo para que nadie pueda acceder a datos personales.

Entiendo que se debe sancionar también a la Doña CCC Secretario Coordinador de la Provincia de YYY ya que teniendo conocimiento del ilegal acceso a datos personales de este»

Adjunta a la reclamación copia del Acuerdo de la Secretaria Coordinadora Provincial de YYY.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Examinada la reclamación se comprobó que faltaba en el cuerpo del formulario parte de lo que pretendía poner en conocimiento el reclamante, por lo que se puso en conocimiento del mismo dicho extremo por si interesaba ampliar la misma en los extremos que creyese oportunos, comunicación que se remitió en fecha 3 de junio de 2024 por medio de correo electrónico.

El día 3 de junio de 2024 se recibió correo electrónico del Sr. AAA, en el que se adjuntaba escrito de queja, copia de Decreto de inadmisión a trámite de solicitud de conciliación dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de YYY, en fecha 16 de enero de 2024, copia del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 22 de enero de 2024, junto con certificación del mismo y comunicación para su notificación al reclamante y copia del Acuerdo de la Secretaria Coordinadora Provincial de YYY. El escrito de queja-reclamación sobre la posible vulneración de la normativa de protección de datos, es del contenido literal siguiente:

«PRIMERO.- DEL PROCEDIMIENTO DE JURISDICCION VOLUNTARIA. CONOCIMIENTO DEL MISMO PESE A NO HABER SIDO NOTIFICADO POR CONDUCTO OFICIAL.

Soy letrado en ejercicio y más concretamente el número... del Ilustre Colegio de Abogados de XXX.

Interpuse expediente de Jurisdicción Voluntaria previo a interponer Querella contra la magistrada Doña BBB (titular del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 3 de los de YYY)

El expediente de jurisdicción voluntaria fue inadmitido ad limine por Decreto firmado por el Secretario Judicial D. DDD, es decir, el expediente de jurisdicción voluntaria fue inadmitido sin dar traslado a la parte conciliada, dícese la Ilustre Magistrada Doña BBB

Por ese motivo interpuse queja contra el letrado de la Administración de Justicia que firmó el Decreto de Inadmisión dícese contra D. DDD al considerar que es el responsable de las actuaciones judiciales llevadas en ese órgano judicial.

Mi sorpresa crece todavía más cuando recibo la respuesta a la queja antes citada desde la Secretaría Coordinadora Provincial de YYY en el Expediente 144/2024 en el que el propio letrado de la administración de justicia admite haber notificado a la Magistrada la existencia de un procedimiento contra la misma pese a no estar admitido a trámite. Literalmente dice :

"...Alega igualmente que la posible abstención también se comunicó a la magistrada del juzgado nº 3 informándole de que habían presentado contra ella un acto de conciliación, si bien no dijo quien era el conciliante ni le entregó copia de tal...."



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Seguimos leyendo lo alegado por el letrado de la administración de Justicia y evidencia un absoluto descontrol sobre los datos que existen en el Juzgado del que es Letrado de la Administración de Justicia ya que literalmente dice "que desconoce en definitiva quién entregó la copia del acto de conciliación a la magistrada , si bien cualquier funcionario puede acceder a través de Minerva a cualquier documento que conste en el mismo "

Es decir, si la respuesta del letrado de la administración de Justicia es correcta existe un absoluto descontrol y un manifiesto incumplimiento de la legislación de protección de datos y no sólo ello sino que es notorio y evidente que alguien ha entrado al menos en ese procedimiento pero también cualquier otro funcionario de Justicia(incluidos todos los magistrados) han podido acceder a todos los datos de este letrado ahora denunciante incluidos antecedentes penales e históricos de procedimientos civiles y penales sin ningún tipo de autorización ni de habilitación legal sino por simple cotilleo o peor aún para aportar esos documentos a los que no deberían haber tenido acceso a procedimientos seguidos ante el CGPJ solicitando amparo , es decir, acceso a datos que están absolutamente protegidos para obtener beneficios que de hecho por ahora ha conseguido.

Adjunto como documento 3 acuerdo de la secretaría provincial de YYY.

TERCERO.- GRAN NUMERO DE USUARIOS DE PROGRAMA DE GESTION PROCESAL HAN PODIDO TENER ACCESO Y COPIA

Según Doña CCC, Secretario Provincial de YYY, " ... las copias.... se han podido obtener por gran número de usuarios de ese sistema de gestión procesal" lo cual implica que en la administración de Justicia, al menos en YYY, no existe ningún control sobre quien accede a los expedientes Judiciales, obtiene copia de los mismos y lo que hace con ellos.

Pero no sólo es preocupante lo anterior sino que al archivar el procedimiento contra el letrado de la administración de Justicia directamente y sin ninguna actividad probatoria más de investigación a ver si alguien ha accedido al expediente o si alguien lo ha impreso se puede entender que es práctica habitual y consentida por los responsables de la Administración de Justicia.

CUARTO.- CONCLUSION

Es incontrovertido que alguien ha accedido a un expediente judicial y es evidente y notorio que la Magistrada Doña BBB, sin tener autorización para ello, tenía una copia del expediente de jurisdicción voluntaria y lo ha aportado al CGPJ.

Es evidente e incontrovertido que bien la propia Doña BBB o bien el letrado de la administración de Justicia o, como se dice desde la Secretaría Provincial de YYY, una gran cantidad de usuarios ha podido acceder sin límite a datos de procedimientos judiciales e incluso antecedentes penales de este letrado sin justificación legal para ello por lo que podrían haber cometido un delito

Es evidente y notorio que tengo derecho a conocer cuantos usuarios han accedido a mis datos judiciales y personales desde la administración de justicia y es evidente que la Administración de Justicia debe investigar y en caso de ser cierto lo manifestado por el letrado de la administración de Justicia y la Secretaria Provincial de YYY debe poner todos los mecanismos oportunos para sancionar a todos y cada



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

uno de los funcionarios que hayan accedido a cualquier dato personal o procedimiento de este letrado y es evidente que la administración de justicia debe cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos y poner límites para que no se puedan consultar datos de justiciables como si de una "barra libre se tratara".

Por lo expuesto

SOLICITO.- Que se tenga por presentado el presente escrito junto con los documentos adjuntos, por realizadas las manifestaciones que constan en el mismo y en su virtud por interpuesta queja contra el Letrado de la Administración de Justicia D. DDD así como contra la Ilustra Magistrada Doña BBB, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de los de YYY y contra todo aquel funcionario (incluidos Magistrados) que después de una investigación minuciosa se averigüe haya accedido a cualquier dato personal de Don AAA que conste en la administración de justicia o sea accesible desde los sistemas informáticos de la misma incluidos antecedentes penales e información económica así como cualquier tipo de procedimiento judicial dándose traslado al propio Don AAA de información e informe de todas las veces que se ha accedido a sus datos desde la administración de justicia, tipo de datos a los que se ha accedido y nombre completo y filiación de aquellas personas que hayan accedido a los mismos, números de veces y terminales desde los que hayan tenido acceso haciendo especial referencia a impresiones de datos o copias de documentos obtenidos».

Segundo.- Mediante comunicación del Director de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial de 5 de junio de 2024 se acusó recibo al reclamante y se le informó del inicio de actuaciones previas informativas relativas a los hechos denunciados, solicitándose en esa misma fecha información sobre los mismos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de YYY.

En fecha 6 de junio de 2024 tiene entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial la reclamación presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos por el Sr. AAA, con el siguiente contenido:

«El reclamado D. DDD actuando como letrado de la Administración de Justicia lo es del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de YYY tuvo conocimiento de un procedimiento judicial contra una Magistrada de su juzgado (del 3) ya que estaba sustituyendo a la responsable del Juzgado 4. El reclamado reconoce en escrito adjunto que quebrando el deber de secreto le dijo a la magistrada (entendemos que por amistad) que se había interpuesto un procedimiento judicial contra ella. El reclamado niega haberle dado documentación del procedimiento. Interpuesta queja en la Administración de Justicia la responsable Doña CCC nos responde literalmente y sin que nos conste que haya realizado nada para evitarlo: Que cualquier funcionario puede acceder de manera indiscriminada a cualquier procedimiento judicial. Si lo manifestado es cierto es notorio y evidente que no existe ningún sistema que evite el acceso de datos sensibles en justicia y que cualquier funcionario, repito cualquier



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

funcionario, tiene acceso a los mismos y puede conocer lo que existe en los procedimientos (aunque no sean de su juzgado) y contarle a sus compañeros y prensa todo lo que estime oportuno. En el presente caso según lo manifestó por la Responsable Doña CCC se ha podido consultar mis datos judiciales, antecedentes penales o cualquier otro de manera indiscriminada y sin habilitación legal para ello.»

Comprobado que se trataba de los mismos hechos que la reclamación presentada ante este órgano Constitucional en fecha 28 de mayo se unió al presente expediente.

El informe interesado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de YYY tuvo entrada en el Registro general del Consejo el día 10 de junio de 2024, suscrito por la Letrada de la Administración de Justicia del juzgado, señalándose en el mismo lo siguiente:

«A la vista de la petición de información sobre reclamación por vulneración de normativa de protección de datos, se pone en conocimiento que la Letrada suscribiente tomó posesión en la UPAD 4 de YYY el día 15 de abril de 2024 y que no tiene conocimiento del procedimiento indicado. En caso de que se solicite el acceso al mismo, se puede remitir a la dirección que se indique. Ahora bien, examinados los datos indicados, y revisados los expedientes, se informa del estado del mismo:

Se trata del procedimiento de conciliación X53 7/2024. Se inadmitió a trámite la conciliación, interponiéndose recurso de revisión contra el decreto que acordaba no admitir a trámite la conciliación. Por medio de auto se desestimó el recurso de revisión interpuesto y frente al auto se interpuso recurso de apelación el cual fue inadmitido. Se ha interpuesto ante la Audiencia Provincial de YYY recurso de queja que a día de hoy está pendiente de resolver (se ha traspasado a la Audiencia los 30 euros del depósito pero está pendiente de resolver la queja interpuesta)».

Tercero.- Comprobada que la reclamación se dirigía al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de YYY, que actuaba en ese momento en sustitución en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de YYY, al que correspondió la demanda de conciliación interpuesta por el reclamante, en fecha 12 de junio se remitió al mismo requerimiento de información de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, por medio de correo electrónico, remitiendo informe dicho Letrado por la misma vía, en fecha 13 de junio de 2024, con el siguiente contenido:

« En cuanto a la parcialidad o imparcialidad y entrega de copia a la magistrada de este letrado se debo de indicar lo siguiente:

Una vez minutada la papeleta de conciliación, por este letrado y previo a resolver sobre su admisión o inadmisión se informó a la Sra. a coordinadora de YYY que se había interpuesto un acto de conciliación contra Doña BBB magistrada del



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

juzgado Upad (instancia e instrucción nº 3 de YYY) de YYY del que este LAJ es titular, planteándole sobre la posibilidad de abstenerse hecho que también se le informó verbalmente a la magistrada interina que en ese momento estaba en la Upad (instancia e instrucción nº 4 de YYY).

La Sr secretaria coordinadora después de plantearle la posibilidad de abstenerse y estudiar el caso llegó a la conclusión que al no tener ninguna relación más que la profesional no debía de plantear la abstención.

De la posible abstención también se informó a la magistrada del juzgado nº 3, por razones de ética profesional, informándola que habían interpuesto contra ella un acto de conciliación, pero reitero no se le informó de nada más, ni de le dijo quién era la parte que planteaba la conciliación ni se le entregó copia de la papeleta de demanda, es más en minerva este letrado no ha firmado ninguna resolución de la que dé traslado de la papeleta de conciliación a la magistrada.

A este letrado por la Sra. magistrada Doña BBB comento que la conciliación la habría planteado un abogado, hecho que no fue ni confirmado ni desmentido por este letrado. En cuanto a la copia que adjunto al consejo desconozco quien se la entregó, pero a través de Minerva cualquier funcionario de YYY puede acceder a cualquier documento con independencia de la valoración jurídica que el hecho pueda tener.

Me consta porque he sido informado que la magistrada solicitó amparo contra un abogado y que el CGPJ se lo debió de conceder, desconociendo que había aportado y en que se basaba para solicitar el referido amparo.

En relación con la inadmisión ad limine:

Examinada la documentación y en concreto el auto del Tribunal Supremo entendía este letrado que no procedía su admisión por los motivos que se indicaron en el referido decreto que en ningún caso vulneraban el derecho a la tutela judicial efectiva ya que contra el mismo cabía recurso de revisión en caso de ser estimado por auto del magistrado se hubiera admitido, hecho que desconozco toda vez que ya no estoy en el juzgado nº 4 de YYY. Se interpuso recurso de revisión contra el decreto de fecha 16/01/2024 de la conciliación 7/24, desconociendo este letrado el resultado de dicho recurso toda vez que este letrado cesó en febrero sus funciones del LAJ en sustitución de la UPAD (instancia e instrucción nº 4 de YYY)

Por último, quiero indicar que por mi parte mi conducta ha sido ajustada a derecho, objetiva e imparcial tomando todas las medidas al ser letrado de ambos juzgados y ser la interesada magistrada del juzgado 3 de YYY donde este letrado es titular».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los tratamientos de datos personales que se realizan en el marco de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Así se desprende del artículo 2, apartado 4, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: "[e]l tratamiento de datos llevado a cabo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables”.

Por su parte, el artículo 236 bis de la Ley Orgánica 1/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), establece en su apartado 1 que *“[el] tratamiento de los datos personales podrá realizarse con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Tendrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional”.*

En consonancia con ese precepto, y siguiendo la LOPJ, su artículo 236 apartado 1 precisa que *“[el] tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales”.*

Y el apartado 2 del mismo precepto dispone que *“[e]n el ámbito de la jurisdicción penal, el tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos, diligencias o expedientes de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.*

Segundo.- Estos artículos deben ponerse en relación con el artículo 236 octies de la LOPJ que atribuye a la Dirección de Supervisión y Control del Consejo General del Poder Judicial, respecto a las operaciones de tratamiento de datos con fines jurisdiccionales que realicen los Juzgados y Tribunales y las Oficinas Judiciales, diversas funciones, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).

Estas funciones del artículo 236 octies de la LOPJ, se complementan, a su vez, con aquellas que sean aplicables de las recogidas tanto en el artículo 57 del Reglamento General de Protección de Datos, y en el artículo 48 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

En consecuencia, la competencia de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial se ejerce respecto de los tratamientos de datos personales efectuados con fines jurisdiccionales, cuya caracterización se recoge en el apartado primero del artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor "[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional".

Tercero.- Los hechos objeto del presente expediente se refieren a la posible difusión indebida de la presentación de una solicitud de conciliación interpuesta por el reclamante. En consecuencia, se dan los elementos caracterizadores de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales siendo competente para su conocimiento el Consejo General del Poder Judicial.

Cuarto.- De la información aportada por el Letrado de la Administración de Justicia contra el que va dirigida la reclamación queda patente que el mismo actuó debidamente, en primer lugar planteando una posible abstención de conocer sobre la admisión a trámite de la solicitud de conciliación interpuesta, al ir dirigida contra la Magistrada del Juzgado del que el reclamado es titular. Si bien es cierto, y así queda patente tanto en la contestación del referido Letrado de la Administración de Justicia como en la documentación obrante en el expediente y aportada por el reclamante, que se puso en conocimiento de la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de YYY que se había interpuesto una solicitud de conciliación contra la misma, no se trasladó a la misma ni el contenido de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

dicha solicitud ni la persona que la interponía. Por lo que, en ningún momento se ha vulnerado la normativa de protección de datos ni el deber de confidencialidad que ostenta el referido funcionario.

En consecuencia, del informe emitido por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de YYY y del de la Secretaria Coordinador Provincial de YYY de la reclamación planteada no es posible apreciar ningún indicio racional de la existencia de una infracción de la normativa de protección de datos.

Quinto.- Habiendo quedado delimitados los hechos denunciados en la reclamación presentada y en el informe del Servicio Común, no procede llevar a cabo ulteriores actuaciones de investigación en relación con los mismos, debiéndose proceder al archivo de las actuaciones del presente expediente.

ACUERDO

1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por AAA frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de YYY, registrada con el número de expediente 040/2024.

2.- Notificar la presente resolución a AAA, al Juzgados de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de YYY y al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de YYY.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Firmado digitalmente
Francisco Javier Sempere Samaniego
Director de Supervisión y Control de
Protección de Datos (e.f.)